

DIVORCIO CONTENCIOSO. SIN PENSIÓN COMPENSATORIA

Matrimonio que se divorcia y el juzgado concede la custodia compartida por semanas y una pensión compensatoria durante 15 meses para la mujer porque en el momento de la sentencia no trabaja. El padre recurre la sentencia, y pide ante la audiencia provincial la práctica de prueba para ver si la madre trabaja, y se conoce que la madre trabajó y se dio de baja en la empresa de manera voluntaria, lo que permite deducir que cuenta con ingresos suficientes para no considerar demostrada una situación de desequilibrio patrimonial en relación con la que mantenía en el matrimonio, por lo que se revoca la concesión de la pensión compensatoria.

Estamos ante un caso en que la mujer no decide trabajar hasta después del juicio de divorcio, y luego se pone a trabajar, pero al conocer el recurso presentado por el marido y las pruebas solicitadas por este decide darse de baja para que no la quite la pensión, pero la pillan y se la quitan.

Fechas relevantes

- Fecha sentencia?? No aparecer en la sentencia.
- Fecha presentación del recurso??. No aparece en la sentencia.
- 6 mayo 2019 comienza a trabajar
- 11 septiembre 2020 presenta la baja laboral
- 27 octubre 2020. Fecha deliberación audiencia
- 4 noviembre 2020 sentencia Audiencia provincial de Valladolid

Cabecera: Pension compensatoria. Pension alimenticia. Ejercicio de la patria potestad

Finalmente solicita el apelante que se deje sin efecto la concesión de **pension compensatoria a la esposa** porque ha estado trabajando siempre y por su edad y titulación se encuentra en condiciones de acceder al mercado laboral.

La prueba asevera las razones del recurso para no reconocer a la esposa **pension compensatoria**, al margen de la situación coyuntural de paro en que se encontraba en el momento del juicio, pues ha quedado acreditado que tiene facilidad de acceso al mercado laboral por su edad y titulación percibiendo unos notables ingresos como los que resultan del certificado emitido por la entidad dirección y de los que ha decidido voluntariamente prescindir, pues como consta en la certificación citada se dio de baja en la empresa de manera voluntaria, lo que permite deducir que cuenta con ingresos suficientes para no considerar demostrada una situación de desequilibrio patrimonial en relación con la que mantenía en el matrimonio imprescindible para el reconocimiento del derecho previsto en el artículo 97 del código civil.

PROCESAL: Subsanción de omisión y complemento

Jurisdicción: Civil

Ponente: [Francisco Salinero Román](#)

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 04/11/2020

Tipo resolución: Sentencia

Sección: Primera

Número Sentencia: 373/2020

Número Recurso: 402/2019
Numroj: SAP VA 1483/2020
Ecli: ES:APVA:2020:1483

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00373/2020

Modelo: N10250

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 Fax: 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MHM

N.I.G. 47186 42 1 2018 0007257

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000402 /2019

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 10 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0000378 /2018

Recurrente: Arcadio

Procurador: EVA MARIA SANTOS GALLO

Abogado: MARÍA ROSARIO IBÁÑEZ BLANCO

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Margarita

Procurador: , MARIA DEL CARMEN MARTINEZ BRAGADO

Abogado: , FEDERICO RODRÍGUEZ SANZ-PASTOR

S E N T E N C I A Nº 373/2020

Ilmos Magistrados Sres/a.:

D.FRANCISCO SALINERO ROMÁN

D.JOSÉ RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL

D^a. EMMA GALCERAN SOLSONA

En VALLADOLID, a cuatro de noviembre de dos mil veinte

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 1, de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos de

DIVORCIO CONTENCIOSO 378 /2018, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 10 de VALLADOLID, a

los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 402 /2019, en los que aparece como

DEMANDANTE-APELANTE, D. Arcadio , representado por el Procurador de los tribunales, Sra. EVA MARIA SANTOS GALLO, asistido por el Abogado D. MARÍA ROSARIO IBÁÑEZ BLANCO, como DEMANDADA-APELADA,

D. Margarita , representado por el Procurador de los tribunales, Sra. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ

BRAGADO, asistido por el Abogado D. FEDERICO RODRÍGUEZ SANZ- PASTOR, y como APELADA MINISTERIO

FISCAL, sobre DIVORCIO CONTENCIOSO.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Estimando la demanda de Divorcio interpuesta por los Procuradores Sr. Santos Gallo Y Sra. Martínez Bragado en nombre y representación de D. Arcadio y Da Margarita en cuanto a la acción principal.

Declaro: 1.- La disolución del matrimonio celebrado el día 29 de Febrero de 2012 cesando la presunción de convivencia conyugal.

2.- Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado a favor del otro, disuelta la sociedad de gananciales y cesa la posibilidad de vincular bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

Adopta como medidas definitivas las siguientes: 1º.- Sin perjuicio de la titularidad conjunta de la patria potestad sobre los hijos menores de edad, la guarda y custodia se otorga de forma compartida a los dos progenitores con la distribución de estancias, forma de llevarla a cabo y régimen de vacaciones en la forma. que se articula en el fundamento segundo de esta resolución.

Ambos progenitores mantendrán el ejercicio conjunto de la patria potestad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154 y 156 del C. Civil. Por tanto, deberán comunicarse todas las decisiones que con respecto a sus hijos adopten en el futuro, así como todo aquello que conforme al interés prioritario de los hijos deban conocer ambos padres. Deberán establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo. Ambos padres participarán en las decisiones que con respecto a los hijos tomen en el futuro siendo de especial relevancia las que vayan a adoptar en el ámbito escolar, o en el sanitario y los relacionados con celebraciones religiosas. Sobre esa base se impone la intervención

de ambos padres en decisiones relativas al cambio de centro escolar o cambio del modelo educativo. Se impone la decisión conjunta para cualquier tipo de intervención quirúrgica o de tratamiento médico no banal tanto si entraña un gasto como si está cubierto por algún seguro. Se impone igualmente la intervención y decisión de ambos padres en las celebraciones religiosas, tanto en lo relativo a la realización del acto religioso como al modo de llevarlo a cabo sin que al respecto tenga prioridad el progenitor a quién le corresponda el fin de semana correspondiente al día en que vaya a tener lugar los gastos.

Los padres deberán ser informados por terceros de todos aquellos aspectos que afecten a sus hijos y concretamente tienen derecho a que se les facilite a los dos toda la información académica, y los boletines de evaluación e igualmente tienen derecho a obtener información a través de las reuniones habituales con los tutores o servicios de orientación del centro escolar tanto si acuden los dos como si lo hacen por separado.

De igual manera tienen derecho a obtener información médica de sus hijos y a que se les faciliten los informes que cualquiera de los dos solicite.

El progenitor que en ese momento se encuentre en compañía de los hijos podrá adoptar decisiones respecto al mismo sin previa consulta en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias, poco trascendentes o rutinarias que en el normal transcurrir de la vida con un menor pueden producirse.

2ª.- Respecto a los alimentos de los hijos menores, cada progenitor asumirá los gastos ordinarios y extraordinarios en la forma establecida en el fundamento tercero de esta resolución.

En concepto de pensión alimenticia a favor de los hijos, el progenitor deberá entregar a Da Margarita la suma de 500 euros mensuales que será pagada dentro de los cinco primeros días de cada mes y en doce mensualidades al año. Esta pensión se devengará desde la fecha de interposición de la demanda y será actualizada anualmente conforme al IPC.

3ª.- Se fija una pensión compensatoria a favor de la de Da Margarita de 200 euros con un límite temporal de quince meses desde la fecha de esta resolución.

No procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas.

PARTE DISPOSITIVA DEL AUTO: "ACUERDO: Estimar la petición formulada por la parte demandada de completar la sentencia, dictada en el presente procedimiento, en el sentido que se indica: "La custodia compartida será ejercida por cada uno de los progenitores por semanas alternas, de lunes a lunes, con entrega y recogida de los menores en el centro escolar. Si el lunes fuera festivo se entregará a los menores en el colegio el primer día lectivo.

Los progenitores han acordado una visita intersemanal los miércoles desde la salida del colegio hasta las 20.00 horas."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación de D. Arcadio , se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 27 de octubre de los corrientes, en que ha tenido lugar lo acordado.

Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Salinero Román.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Con su recurso la parte apelante atribuye a la Juzgadora "a quo una errónea valoración de la prueba sobre su real situación económica.

Poco podemos y debemos añadir a los acertados argumentos tenidos en cuenta por la Juzgadora "a quo" para resolver como lo hace la cuestión planteada por lo que los hacemos nuestros en su integridad para evitar innecesarias repeticiones.

Como ya es criterio de esta Sala en sintonía con el criterio jurisprudencial sentado entre otras en la sentencia de la Sala Primera de 10 de septiembre de 2015 solo será criticable la valoración del Juzgador a quo de la prueba practicada cuando la efectuada en la instancia es ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica (SSTS de 9 de marzo de 2010 , RIP n.º 1988/2005 , 11 de noviembre de 2010 , RIP n.º 1881/2005); o se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 10 noviembre 1994 , 18 diciembre 2001 , 8 febrero 2002); o se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 18 diciembre 2001 , 8 febrero 2002 , 13 diciembre 2003 , 9 junio 2004); o se adopten criterios desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995 , 18 diciembre 2001 , 19 junio 2002).

Tales condiciones negativas no se aprecian en la actividad valorativa de la Juzgadora "a quo" cuando concluye que por las pruebas practicadas da por demostrado que cuesta con recursos suficientes para atender las obligaciones económicas puestas a su cargo.

Es innegable que el recurrente desempeña unas actividades profesionales respecto de las que no es posible objetivar de manera indubitada sus reales ingresos por lo que la Juzgadora acude a la prueba presuntiva de indicios para determinar si cuenta o no con ingresos suficientes. Y ello lo deduce de manera lógica de su patrimonio inmobiliario y mobiliario, descrito en el fundamento jurídico tercero, que le genera unas obligaciones que no podría atender si contase solo con los ingresos que dice percibir. No es óbice si la Juzgadora se ha equivocado en razonar si tributa por el sistema de módulos o de estimación directa simplificada.

Como bien razona la Juzgadora los datos los fiscales aportados por el actor son documentos de elaboración unilateral que por lo mismo no constituyen una prueba relevante por sí misma para justificar los auténticos ingresos y el estado económico real de un contribuyente. **Correspondía al apelante aportar la documentación precisa de que la información fiscal contenida en los modelos era correcta por el principio de facilidad probatoria** (art.217.7 de la L.E.Civil) pues solo él dispone de esa documentación como administrador de su empresa. Esa conclusión de la Juzgadora de presumirle ingresos bastantes es conforme con las propias declaraciones efectuadas por el apelante a la trabajadora social en el informe que emitió el 28 de enero de 2019 en que le manifiesta ganar unos 4.000 euros mensuales siendo una cifra variable en función de las ventas realizadas.

SEGUNDO.- Insiste en su argumento del no carácter retroactivo de la obligación de abonar los alimentos a fecha de interposición de la demanda.

El motivo se desestima. El criterio jurisprudencial sobre esta cuestión es reiterado desde la sentencia de 14 de junio de 2011. Ha sentado la Sala Primera del Tribunal Supremo la regla de que los alimentos debidos a los hijos menores de edad en casos de separación de sus progenitores participan de la naturaleza de los que deben prestarse como consecuencia de la patria potestad y de los alimentos entre parientes en general, aunque tienen características propias, como consecuencia de las circunstancias en que se declara la obligación de prestarlos. En la reclamación judicial de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda.

TERCERO.- Finalmente solicita el apelante que se deje sin efecto la concesión de pensión compensatoria a la esposa porque ha estado trabajando siempre y por su edad y titulación se encuentra en condiciones de acceder al mercado laboral. La sentencia se la reconoce porque en el momento del juicio se encontraba en paro y le concede una pensión de 200 euros con un límite temporal de 15 meses.

Se ha practicado prueba en esta alzada y de su resultado se desprende que menos de dos meses después de dictarse la sentencia apelada la esposa encontró trabajo en la empresa DIRECCION000 en la que **comenzó a trabajar con un contrato** de duración indefinida el día 6 de mayo de 2019 y en la que permaneció en alta laboral hasta el día 11 de septiembre de 2020, fecha en la que **presentó su baja voluntaria** habiendo percibido durante todo ese tiempo unos ingresos brutos anuales 22.000 euros más variables. La prueba asevera las razones del recurso para no reconocer a la esposa pensión compensatoria, al margen de la situación coyuntural de paro en que se encontraba en el momento del juicio, pues ha quedado acreditado que **tiene facilidad de acceso al mercado laboral** por su edad y titulación percibiendo unos notables ingresos como los que resultan del certificado emitido por la entidad DIRECCION000 y de los que ha decidido voluntariamente prescindir, **pues como consta en la certificación citada se dio de baja en la empresa de manera voluntaria, lo que permite deducir que cuenta con ingresos suficientes para no considerar demostrada una situación de desequilibrio patrimonial en relación con la que mantenía en el matrimonio** imprescindible para el reconocimiento del derecho previsto en el art. 97 del Código Civil.

CUARTO.- En cuanto a las costas de esta alzada, estimado en parte el recurso de apelación, no cabe hacer expresa imposición por disponerlo así el art. arts. 398.2 de la L.E.Civil).

VISTOS, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto a nombre de Don Arcadio contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Valladolid en fecha 18 de marzo de 2019 en los autos a que se refiere este rollo debemos revocar y revocamos la aludida resolución en el siguiente particular: - Dejamos sin efecto el pronunciamiento que concede a la esposa el derecho a percibir pensión compensatoria Confirmamos el resto de pronunciamientos del fallo recurrido sin hacer imposición de las costas de esta alzada De conformidad con lo dispuesto en el apartado octavo de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según redacción de la Ley Orgánica 1/2009, publicada el día 4 de noviembre y vigente desde el día siguiente, acordamos, también, la devolución del depósito constituido al recurrente al haberse estimado el recurso.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.